

dear la situación de los grandes consumidores de electricidad. Y la realidad es que el incremento de los precios de los futuros ha sido mucho menor al del gas, de alrededor del 10%. González augura que el efecto estacionalidad actuará como un amortiguador para los precios, porque no será tan necesario recurrir al gas para generar electricidad gracias al fin del frío y al mayor peso de las renovables en el *mix* (la combinación de las distintas fuentes con que se produce electricidad).

"Nos adentramos en la primavera, lo que tiene un efecto sobre la demanda porque desaparece el frío y el consumo energético residencial baja, reduciendo los precios. Además, empieza la aportación masiva de la solar fotovoltaica, que te garantiza durante muchas horas del día precios bajos. A ello se suma toda la aportación hidráulica acumulada por las lluvias en febrero, que debe tener un efecto positivo", relata al teléfono. Esa tregua, sin embargo, tiene

fecha de caducidad. "Si la guerra se enquista y llega el verano habrá problemas, porque los aprovisionamientos de gas están en mínimos, y hay que llenarlos para el invierno".

La entidad, de la que forman parte firmas como Acerinox, ArcelorMittal o Alcoa, ha recibido con desconcierto lo sucedido. "Ha sido un *shock*. Aunque había ruidos, la magnitud de lo ocurrido ha sido algo inesperado", afirma González. Eso ha impedido que se contraten coberturas a tiempo, y ahora los costes de asegurarse precios fijos se han incrementado. "Estamos ante una deriva muy compleja, porque dices: ¿Cierro ahora una cobertura al doble de precio de la semana pasada? ¿Y qué pasa si esto se acaba en 10 días, me trago el gas al doble de precio?", relata el presidente de la patronal.

Esa dicotomía entre una guerra relámpago y una campaña de largo recorrido lo marca todo. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha hablado de una operación destinada a terminar en cuatro o cinco semanas, nadie sabe a ciencia cierta cuánto durará la guerra. Jordi Espín, secretario general de SSC, la organización que agrupa a los importadores españoles, participó ayer en una reunión de crisis en Bruselas con otros importadores globales que se cuentan entre los mayores clientes de las navieras, encargadas del transporte de más del 80% del comercio mundial. "Se están aplicando recargos que llegan a 4.000 dólares por contenedor", describe. Eso supone que los clientes de las navieras pagan el doble por sus contenedores que antes del ataque estadounidense.

Espín explica que la crisis está causando un efecto dominó, porque al afectar a rutas por el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el canal de Suez, tres puntos clave para el comercio, otras se están congestionando. El cóctel lo completa, cuando las mercancías tocan tierra, un transporte por carretera que ya está notando subidas en el precio de los combustibles, lo que implica gastos extra. "Si esto continúa, acabará repercutiendo en los usuarios. Si el lunes se acaba, todo puede volver a la normalidad", contraponen Espín.

Una acería de Avilés, en una imagen de ArcelorMittal.



Una usuaria revisa una factura de su vivienda. VÍCTOR SAINZ

Ocho millones de usuarios afrontarán subidas de la luz

El alza en los mercados mayoristas impacta a quienes cuentan con tarifas reguladas

JUAN CRUZ PEÑA
Madrid

La escalada bélica desatada en Oriente Próximo tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya empieza a notarse en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anticiparon ayer que habilitarán medidas para tratar de paliar el daño sobre las economías domésticas.

El más inmediato puede venir reflejado en la factura energética y afectar a más de 11 millones de hogares. El incremento del gas y el petróleo a escala internacional se traducirá en un recibo gasista y eléctrico más caro. El impacto se notará a corto plazo y más directamente sobre los hogares españoles que dispongan de tarifas reguladas, ya que están diseñadas para recoger de forma inmediata el precio de los hidrocarburos en los mercados mayoristas.

El peso específico que tienen los países del golfo Pérsico afectados por las hostilidades en los mercados energéticos globales ha provocado una repentina subida de los precios del gas y el crudo, dada la expectativa de que ese foco de oferta se cerrará y tensará los precios por las dificultades de tránsito de los buques en el estrecho de Ormuz, donde se concentra el 20% del tráfico de los principales productos energéticos.

La referencia gasista en Europa (el índice TTF holandés) ha pasado de rondar los 30 euros por MWh a superar los 50 euros por MWh, lo que representa un incremento de más del 66%. El petróleo también se ha descontrolado: el coste del barril de *brent* ha aumentado de los 70 dólares a rondar los 80 (+15%).

En este contexto, la tarifa regulada de gas, a la que según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) están acogidos más de tres millones de consumidores, sufrirá una revisión al alza el próximo 1 de abril, momento en que se produce la actualización trimestral. La Tarifa de Último Recurso (TUR) se revisa con una fórmula que recoge los precios internacionales del gas y otros productos, por lo que si

continúa el ascenso de los precios todo apunta a que tendrán un recibo más caro el próximo mes.

La situación impacta aún más sobre la factura de la luz. La CNMC señala que más de ocho millones de hogares tienen la tarifa regulada Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC). Este formato también está vinculado al precio diario de la electricidad, que ha sufrido una repentina subida en los últimos días. Según los datos del mercado ibérico OMIE, el precio mayorista de la luz ha pasado de una media de 16,41 euros por MWh en enero y febrero a 90 euros por MWh ayer. Esto es así porque el precio de la electricidad se basa a su vez en el precio del gas.

El problema es diferente para los usuarios con contratos de luz y gas del mercado libre, que suelen tener su revisión de precios anual y son más estables. Sin embargo, esto suele implicar que son más caros, precisamente por la garantía de estar cubiertos ante la volatilidad del mercado. En cambio, las revisiones anuales también se basan en el precio mayorista. Para evitar fraudes y engaños, el Ministerio para la Transición Ecológica ha prohibido hacer ofertas energéticas por teléfono.

Las principales compañías españolas de infraestructuras, entre ellas las cotizadas ACS, Ferrovial, Sacyr, FCC y OHLA, respiraron más tranquilas ayer por la subida del 2,49% del Ibex tras una jornada muy volátil. Si bien no descartan un ataque de Trump contra los intereses españoles, se ha extendido el convencimiento en el sector de que su actividad en el país no se verá impactada.

Con información de J. G. Roper, Á. Bayón, J. F. Magariño, S. Millán y C. Monforte.



der se encuentra en un momento especialmente delicado en su apuesta estadounidense, puesto que afronta en los próximos meses las autorizaciones para cerrar la transacción. En concreto, necesita el sí de dos administraciones que dependen de la Casa Blanca.

Entre otras grandes inversiones en EE UU se encuentran las de gigantes energéticos como Repsol e Iberdrola. La primera cuenta con activos de exploración y producción en Marcellus Shale en Pensilvania, Eagle Ford Shale en el sur de Texas, golfo de

México y North Slope en Alaska. En el ámbito de las renovables, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz entró en 2021 y ya cuenta con 2.000 MW de capacidad verde, con el objetivo de llegar a 3.000 MW. En cuanto a Iberdrola, opera en EE UU a través de su filial Avangrid, centrada en redes eléctricas, de gas y renovables. Iberdrola y Repsol han declinado hacer comentarios a las preguntas de este periódico.

Las que han mostrado una mayor sensación de alarma han sido las empresas del sector de alimen-

tación, representadas por la patronal FIAB, que ha recordado que EE UU "es un mercado fundamental", al que el año pasado se exportaron alimentos y bebidas por valor de 3.041 millones, sobre todo de aceite, jamón y vino. España es, de hecho, el principal exportador mundial de aceite de oliva a escala global, y también a EE UU: en 2024 esas ventas generaron cerca de 1.200 millones de euros. Otro sector clave para la economía española, el del automóvil, que representa en torno al 10% del PIB nacional, también está

expuesto a EE UU, sobre todo en la parte de componentes y piezas. En la producción de coches, una actividad en la que España es una potencia como segundo fabricante europeo y noveno mundial, la afectación es nula.

Otra de las compañías nacionales con mayor sensibilidad a un ataque comercial de Trump es la farmacéutica Grifols, ya que desde ese país provienen más del 50% de sus ventas. La compañía, que ha declinado hacer comentarios, cuenta con más de 300 centros de donación en EE UU.